



La dinámica interna de la “Gran China”

Agustín Maraver
Sociólogo,
especialista en
Relaciones Internacionales,
UNED, Madrid

En medio de la recesión internacional, la zona que los analistas han llamado la “Gran China” (Las provincias litorales de la República Popular, Taiwan y Hong Kong) ha experimentado en los últimos tres años las mayores tasas de crecimiento conjunto, y el mayor flujo inversor de la historia del capitalismo, teniendo como principal protagonista a un país cuyas autoridades siguen declarándolo oficialmente “socialista”. ¿Cuál es la dinámica interna que ha permitido esta expansión sin precedentes del mercado, uniendo económicamente dos Estados y una colonia separados en una lucha a muerte por la legitimidad histórica del país durante la Guerra Fría? ¿Qué relación se ha establecido entre las políticas modernizadoras neautoritarias de los gobiernos de ambos lados del estrecho de Formosa y los movimientos democráticos de masas surgidos en 1989? ¿En qué medida este crecimiento económico puede escapar a las causas que han motivado la recesión internacional? ¿Cuáles son las bases políticas y los cimientos sociales de la política de unificación nacional de Beijing? Estas son algunas de las preguntas de cuya respuesta dependerá el futuro del equilibrio regional de la zona del Pacífico.

La crisis del consenso de 1989

Poco después de celebrar el 70 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh), en julio de 1991, Deng Xiaoping inició los preparativos para romper el consenso alcanzado en su dirección tras la crisis de Tienanmen. Un consenso basado en la reafirmación del monopolio del poder del partido, excluyendo cualquier tipo de pluralismo, la aplicación de una política de ajuste económica que frenase la inflación, controlando la demanda agregada y sometiendo a las autoridades locales a la disciplina financiera de Beijing, y a la necesidad de restablecer la estabilidad social en el país.

La lista de las razones de Deng para impulsar un nuevo “salto adelante” en la política de reformas era larga. En primer lugar, la política de ajuste iniciada a finales de 1988 y aplicada con toda firmeza después de junio de 1989 estaba revelando sus límites: la inflación había descendido de un 18% a un 4%, aunque a costa de una caída paralela del Producto Nacional Bruto (PNB) del 11% al 5%. Pero, sobre todo, el centro era incapaz de mantenerla ante las resistencias y presiones de las autoridades regionales de las provincias costeras, principal base de apoyo político de Deng. El estrangulamiento crediticio impuesto por Li Peng había ahogado en un mar de deudas al sector público de la

economía, amenazando la continuidad de los servicios sociales que presta, y las autoridades locales, con sus bases fiscales en los sectores colectivos y privados de la economía, exigían una política de relanzamiento económico y de las reformas como contrapartida a mayores transferencias fiscales al centro, cuyos ingresos se han reducido de un 34% del PNB, en 1978, a menos del 20% actual. Frente a esta presión poco podían los argumentos de Chen Yun y Chen Yuan, cabezas de filas de los conservadores, a favor de un crecimiento más moderado para mantener la estabilidad social: si el Estado central no disponía de los fondos necesarios para mantener los subsidios al sector público, con un déficit presupuestario del 3% del PNB, y empezaban a quebrar empresas, la explosión social estaba a la vuelta de la esquina.

En segundo lugar, las campañas contra el “liberalismo burgués” y contra la corrupción, emprendidas después de la crisis de Tienanmen por ideólogos conservadores como Deng Liqun y Gao Di, habían tenido escaso éxito. La

“Las campañas contra la corrupción habían tenido escaso éxito en la China anterior a Tiannamen”

represión había conseguido acabar con el movimiento democrático -al alto precio de un desprestigio internacional que acabaría por denegar a Beijing, en nombre de la defensa de los Derechos Humanos, la organización de los juegos olímpicos del año 2000-, pero la crisis ideológica y de legitimidad política del PCCh se extendía a toda la sociedad. Después de 11 años de reformas con la consigna del enriquecimiento privado, asegurando que el color del gato carece de importancia mientras cace ratones, poco quedaba del igualitarismo maoísta y de las llamadas a “servir al pueblo”. Deng Liqun resucitó el fantasma de Lei Feng, el soldado ejemplar a imitar de la Revolución Cultural, en su campaña contra la “polución espiritual”, pero en una China cuyos habitantes quieren convertirse todos en *getihu* (empresarios privados), bailan en las discotecas con música de protesta de Cui Jian y leen folletines de Wang Shuo. El resultado de la campaña no por sorprendente fue menos lógico: un nuevo mercado para las canciones de la Revolución

Cultural en versiones disco y punk y una moda retro-kitsch de recuerdos maoístas.

La propia dirección del PCCh, en especial su fracción reformista, hace tiempo que ha sustituido el “marxismo-leninismo-pensamiento Mao Zedong” por un neoautoritarismo modernizante, sobre todo después de junio de 1989, para justificar el monopolio de poder del partido, cuya única legitimidad ya es la de elevar el nivel de vida de la población a través del consumo, poniéndose al frente de las reformas de mercado, en una fórmula que identifica democratización con caos y caos con subdesarrollo. Para agravar las cosas, la fracción conservadora y el propio Deng Xiaoping, aunque con mayor cautela, jugaron desde finales de 1989 a apoyar a los sectores conservadores comunistas en la URSS frente a Gorbachov, posteriormente a éste frente a Yeltsin, y, finalmente, a los golpistas de agosto de 1991, de cuyos planes estaban informados de antemano, todo ello en nombre del mantenimiento del “campo socialista”. El Comité Central del PCCh calificó el fracaso del golpe de “restauración contrarrevolucionaria” y en la circular enviada por Gao Di a los directores de medios de comunicación se afirmaba: «Los incidentes del 19 de agosto fueron muy parecidos a los de nuestro 4 de junio, pero el resultado fue totalmente el contrario. La razón fue que nosotros suprimimos a las fuerzas contrarrevolucionarias sin la menor piedad, mientras que la Junta Soviética no fue capaz de aplicar la dictadura del proletariado»¹. Pero difícilmente se podía continuar la integración de China en el mercado mundial levantando el estandarte de última gran dictadura del proletariado, como pretendían los conservadores.

En tercer lugar, y sin duda el aspecto más importante, tanto el propio Deng como los dirigentes de la fracción reformista están convencidos de que la ventana de oportunidad para llevar a cabo las reformas económicas tenderá a cerrarse a finales de esta década, cuando China se vea obligada, por su crecimiento demográfico, a importar del exterior grandes cantidades de cereales (que las expectativas más optimistas sitúan en 65 millones de toneladas anuales) y de energía (cuya producción nacional crece en un 3% frente a más del 10% del resto de la economía),

utilizando para ello reservas de divisas que no podrán destinarse a la inversión en capital fijo de tecnología avanzada extranjera, limitando la productividad general del país y su competitividad en los mercados mundiales. Si a esta visión se suman la necesidad de un aumento de los presupuestos militares, que ya vienen creciendo un 10% anual en los últimos años, para asegurar su papel de potencia regional en el nuevo reequilibrio estratégico en la zona del Pacífico, así como los peligros que puede encerrar para la suerte de la reforma la desaparición en cualquier momento del propio Deng Xiaoping y el planteamiento de la cuestión sucesoria, sin una clara hegemonía de la fracción reformista que supere el consenso pos-Tiananmen, se empieza a comprender la urgencia.

Deng inició su ofensiva política con un viaje de inspección a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del Sur de China en enero y febrero de 1992, acompañado por el antiguo secretario político de Hu Yaobang, Zheng Bijian, quien redactaría posteriormente el informe del viaje, bajo el anodino título de Documento nº 2. Tras liberar de toda culpa a la política económica reformista de los errores políticos de los dos últimos secretarios generales del PCCh, Hu Yaobang y Zhao Ziyang, que se habrían limitado a su incomprensión de los peligros del "liberalismo burgués", Deng llamaba a un nuevo "salto adelante" de la reforma, poniendo fin a la política de ajuste, con tasas de crecimiento anual del PNB del 10% o superiores. El objetivo era ahora establecer una "economía de mercado socialista" y, una vez más, el principal peligro político venía de los "izquierdistas".

Durante la primavera y el verano se desarrolló una dura lucha fraccional entre conservadores y reformistas. Li Peng, en su informe a la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, en marzo de 1992, fijó como objetivo del gobierno un crecimiento del 6% del PNB, lo que en la práctica significaba continuar con la política de ajuste, para hacer de China «un poderoso país socialista, firme como una roca en el Este». Chen Yun utilizó por última vez su posición como presidente de la Comisión Consultiva Central para hacer, en agosto, una crítica global en diez puntos a las posiciones de Deng, pidiendo la estabilización de la situación económica y política antes de introducir nuevos

elementos de reforma, como la generalización de las bolsas, que debilitasen la capacidad de control administrativo de la economía del Estado central. Las reformas, además, debían basarse más en los recursos internos y menos en capital extranjero, por las consecuencias políticas implícitas. Para los conservadores cualquier reactivación de la reforma ponía en peligro no sólo la política de ajuste económica, sino también el equilibrio político interno del PCCh surgido después de 1989.

El XIV Congreso del PCCh

A mediados de septiembre, tras una previa autocrítica del Secretario General del PCCh, Jiang Zemin, a favor de la nueva posición de Deng, se alcanzó el acuerdo general necesario para la convocatoria del XIV Congreso del partido, del 12 al 18 de octubre de 1992.

El informe general, presentado por Jiang, recogía en lo fundamental las conclusiones del Documento nº 2, con la alabanza explícita a Deng Xiaoping como el «principal arquitecto de la reforma socialista, la política de puertas abiertas y el programa de modernización». Cualquier ataque al programa reformista se convertía así en un ataque al propio Deng, marcando la orientación política para su sucesión.

El XIII Congreso, celebrado en 1987, había supuesto, bajo la dirección de Zhao Ziyang, un inmenso esfuerzo por reformular coherentemente la ideología del programa reformista, bajo la consigna de «construir un socialismo de características chinas» y una «economía mercantil planificada socialista». Ahora, la naturaleza del socialismo queda confinada a «liberar y desarrollar las fuerzas productivas, eliminando la explotación y la polarización, alcanzando la prosperidad común», y el término "planificación" desaparece. El papel del Estado queda reducido al «control y ajuste de las variables macroeconómicas», con la extensión de las leyes de oferta y demanda a toda la economía, meros instrumentos del desarrollo económico que no definen las características sociales del sistema, permitiendo el desarrollo de la competencia y la «supervivencia de los más fuertes»².

El informe señala cuatro zonas de actuación prioritaria para reformar la «economía de mercado socialista», cuyo resultado general debe

ser la reducción del sector público de la economía (que desde 1988 ha visto caer su porcentaje del PIB del 73% al 35%). La reforma del sector público debe permitir una clara independencia jurídica y financiera de las empresas, recortando las subvenciones estatales hasta permitir una reforma completa del sistema de precios, que termine con el doble mecanismo actual. Señal de la correlación de fuerzas en el seno del PCCh, se responsabiliza ahora al núcleo del partido en las empresas de la orientación de estas reformas. El propio carácter público de las empresas es reinterpretado para impulsar su transformación en sociedades anónimas, en las que el Estado se limitará a mantener la propiedad del mayor paquete de acciones, y se incluye en esta categoría de “sector público” también a las empresas de propiedad colectiva.

Tras hacer un llamamiento al desarrollo del sector terciario de la economía, que debe crecer del 27% actual hasta el 40% del PNB, como principal medio para reabsorber el paro que

causará la reestructuración del sector público, el informe desarrolla la política de puertas abiertas hasta hacerla «general, multi-sectorial y multiconexa». La extensión y coordinación de las ZEE, en su cuarta fase de ampliación (ahora al valle del Yangtze a partir de la ZEE de Pudong en Shanghai), responde a la ejemplarización de su dinamismo económico como el «espejo del socialismo

de mercado chino» en la visita de inspección de Deng Xiaoping al sur del país y, al establecer una mayor integración de la totalidad de la economía china con el mercado mundial, fija el predominio de los mecanismos de mercado frente a la gestión administrativa, incluso provincial, de la economía. Lo que antes fue un elemento instrumental de la modernización se convierte ahora en la meta misma de ésta. El objetivo de un crecimiento anual del PNB igual o superior al 10%, defendido por Deng, fue sin embargo moderado a un 8% o 9%, en una concesión formal a los conservadores, dada la creciente debilidad del Estado central para controlar los ciclos inversores de las provincias.

Si el XIV Congreso establece un nuevo paradigma económico, mantiene, con todo, el consenso pos-Tienanmen sobre la necesidad de mantener un control político absoluto del PCCh, excluyendo cualquier tipo de pluralismo, bajo la fórmula de una «dictadura democrática popular». El informe reafirma la condena de Zhao Ziyang y el calificativo de “rebelión contrarrevolucionaria” para el movimiento democrático de 1989, previendo simplemente el reforzamiento de la capacidad represiva del Estado cara a los conflictos sociales que provocará inevitablemente el relanzamiento de la reforma. La modernización del Estado se entiende únicamente como el desarrollo de un marco jurídico exigido por las reformas económicas y la generalización del mercado.

La elección de los nuevos órganos de dirección del partido cobra una importancia sin precedentes, porque éste es el último congreso en el que podrá influir directamente la “generación revolucionaria” para apoyar a sus protegidos -especialmente tras la disolución de la Comisión Consultiva Central por el Congreso- antes de que se abra la cuestión sucesoria tras la muerte de Deng Xiaoping. El aspecto más significativo, que refleja la ofensiva reformista, es el incremento de los representantes provinciales, tanto entre los delegados al Congreso (70,43%) como entre los miembros del Comité Central (del 25% al 60%) y el Buró Político (9 de los 20 miembros). Lo que cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que sólo seis miembros del Buró Político saliente han sido reelegidos y que uno de los promovidos, Yang Baibing, lo es en realidad tras dismantelar su base de poder personal y familiar en el ejército y la Comisión Militar Central, tras la dimisión de su mediohermano, el presidente Yang Shangkun, mientras que el otro representante del Ejército Popular de Liberación (EPL) es el anciano Liu Huaqing. A pesar de su mayor representación en el Comité Central (del 17% al 25%), el EPL no podrá jugar un papel autónomo en los debates sucesorios en los órganos dirigentes del partido.

El Comité Permanente del Buró Político sigue estando dominado por el “eje Jiang-Li” (el Secretario General del PCCh Jiang Zemin y el primer ministro, Li Peng), que representa el consenso entre Deng Xiaoping y Chen Yu como jefes de fracción de reformistas y conservadores.

“El XIV Congreso del PCCh es el último en el que podrá influir la generación revolucionaria”

Pero este equilibrio, destinado a romperse en el proceso sucesorio, parece respetarse en su primera fase y personificarse en el candidato mejor colocado hasta el momento, por la autonomía de su propia base de poder, el responsable del aparato de seguridad, Qiao Shi -protegido de la tercera gran figura de la "generación revolucionaria", Peng Zhen- que fue elegido secretario general del Congreso. Los restantes miembros del Comité Permanente, además de Liu Huaqing, son tres destacados reformistas, lo que les da mayoría en el órgano y asegura la orientación política de la reforma: Li Ruihuan, responsable de los asuntos ideológicos y de prensa desde 1989, Zhu Rongji, actual viceprimer ministro y responsable de la reforma económica, que es el candidato reformista para suceder a Li Peng, y Hu Jintao, que, con sólo 49 años y antiguo protegido de Hu Yaobang, aparece como el representante de las generaciones más jóvenes de cuadros reformistas. El mantenimiento del consenso pos-1989, entendido como equilibrio de parcelas de poder entre conservadores y reformistas, pero no de la orientación final de la reforma, ha exigido así un diseño de la sucesión en dos etapas, que debe llevar finalmente a la hegemonía sin discusión de los reformistas, reflejando la propia evolución de la base social de la nomenclatura durante estos años. La victoria de Deng Xiaoping, incluso después de su ya no muy lejana desaparición, parecía así asegurada, hasta el punto de que el *Financial Times* considerase al dirigente comunista, en su edición de 29 de diciembre de 1992, el hombre del año³.

El "arma mágica del mercado"

Desde el inicio de las reformas en 1978, la economía china ha atravesado tres ciclos (1979-1982; 1983-primer mitad de 1986; segunda mitad de 1986-1991) con una lógica interna similar: el anuncio de nuevas reformas produce un aumento de la demanda agregada, especialmente de las inversiones, que se refuerza con una expansión crediticia que refleja la tendencia de los agentes económicos a identificar reformas con un mayor crecimiento de la producción; las inversiones centrales en energía, transportes e infraestructura no son capaces de crecer al mismo ritmo, por el déficit del

presupuesto, y se producen cuellos de botella que provocan una aceleración de la inflación y un deterioro de la balanza de pagos, incrementando las diferencias regionales y el descontento urbano; se abre el debate entre conservadores y reformistas en el PCCh y, finalmente, se toman medidas administrativas para la estabilización de la economía, que cierran el crédito a nivel central e intentan obligar a los gobiernos provinciales a hacer lo mismo.

Lo que produjo un período de "rectificación" tan largo en el último ciclo, que ha durado tres años (1989-1992), fue la creciente debilidad del Estado central y la resistencia de los responsables provinciales a aceptar las medidas de ajuste a lo largo de 1988, cuando la inflación pasó del 14% en el primer cuarto del año al 43% en el tercero, provocando finalmente la explosión social de Tienanmen, la escisión de la fracción reformista y la caída de Zhao Ziyang. La reconstrucción del consenso en el partido, la desarticulación del descontento social organizado mediante la represión y la imposición de la disciplina a las provincias han sido tareas más complejas que una mera política de ajuste económico.

La versión oficial explica que el actual ciclo se inició en 1992 con el viaje de Deng Xiaoping en enero a la ZEE de Shenzhen, y cobró su impulso definitivo con las resoluciones del XIV Congreso del PCCh. Pero la evolución de las cifras del PIB y de la inversión extranjera, elemento esencial de relanzamiento dadas las restricciones crediticias, así como el crecimiento de la masa monetaria amplia a partir del segundo trimestre de 1991, parecen contar otra historia: que Deng Xiaoping se vio obligado a cabalgar un tigre desenjaulado por las autoridades provinciales. Si la inflación general se mantuvo por debajo del 4% en 1991 fue en buena medida gracias a la extraordinaria cosecha y a un superávit de la balanza comercial equivalente al 3,5% del PNB, como señaló el Banco Mundial a la parte china en las consultas de aquel año.

En cualquier caso, el hecho es que desde el segundo semestre de 1991, hasta finales de 1993, la economía china ha vivido el mayor *boom* de la historia. Si el PNB había crecido en un 5% en 1990, en 1991 lo hizo en un 7,7%, en 1992 en un 12,8% y en 1993 ha superado el 14%. El

crecimiento de las inversiones en capital fijo en los mismos años ha sido del 1,2%, el 18,8%, el 28,2% y en la primera mitad de 1993 llegó al 42,2%, alcanzando la cifra de 6.550 millones de dólares. Para mantener este tirón inversor las importaciones han crecido a un ritmo anual que ha oscilado entre el 21% y el 25%, mientras que las exportaciones, que habían mantenido su ritmo de crecimiento alrededor del 18%, han caído en 1993 al 10%, absorbidas por el mercado interior, produciendo por primera vez desde 1989 un déficit de la balanza comercial de alrededor de 9.000 millones de dólares. Las importaciones de acero de la primera mitad de 1993 fueron un 360% superiores a las del mismo período en 1992, y las de las 22 materias primas principales en un 120%.

En medio de la peor recesión después de la II Guerra Mundial, el capital internacional se vio atraído como un imán por el *boom* chino. En 1992, la inversión extranjera directa se multiplicó por cinco, alcanzando la extraordinaria cifra de 68.500 millones de dólares en nuevos contratos, y la cifra real invertida superó los 7.000 millones de dólares, casi un 23% de la cifra total de las inversiones extranjeras directas realizadas desde 1979. Pero en 1993 la cifra de los nuevos contratos superaba en septiembre los 83.000 millones, con desembolsos de 15.000 millones de dólares. Si en 1992 se registraron más de 47.000 empresas mixtas, en el primer cuatrimestre de 1993 la cifra total sobrepasó las 100.000. En cuanto a las ZEE, “los espejos del socialismo de mercado chino”, crecieron de 117 aprobadas oficialmente a finales de 1991 a más de 2.000 en espera de legalización al terminar 1992. En ese año, China había recibido de cuatro a cinco veces más inversión extranjera que Japón y alrededor del 45% de la de Estados Unidos.

Las consecuencias de esta explosión inversora sin precedentes pronto se hicieron notar. A finales de 1992 la inflación ya había subido tres puntos, hasta situarse en un 6%, aunque en las ciudades de la costa y las ZEE alcanzó el 15%. A mediados de 1993 todo el

país estaba ya por encima de los dos dígitos, y en las ZEE superaba el 25%, obligando al gobierno a posponer cualquier reforma del sistema de precios hasta 1994. La presión en los mercados de cambio extranjeros se expresó en una pérdida de reservas de divisas extranjeras de unos 4.500 millones de dólares y una depreciación del yuan en los mercados de swap de un 75% entre abril de 1992 y junio de 1993, mientras los índices de ahorro doméstico bajaban en picado y se iniciaba un boom especulativo de oro, terrenos y acciones⁴.

Después del verano de 1992 no era ya que el Banco Mundial se hubiera alineado con Chen Yun en su petición de mantener la política de ajuste, es que incluso Jiang Zemin, que se había visto obligado a autocriticarse ante Deng por su timidez expansiva, y el propio responsable de la reforma, Zhu Rongji, se atrevieron a contradecir al presidente de la Asociación de Bridge de China (único título oficial de Deng) y a proponer al XIV Congreso del partido una encubierta política de enfriamiento, con crecimientos del PNB del 8% o 9%. El Congreso, como de costumbre, votó unánimemente, pero los dirigentes provinciales, con mayoría ahora en el Comité Central y jaleados por Deng, siguieron a su propio ritmo, que en el caso de las seis provincias costeras se situó en mayo de 1993 entre el 32 y el 49%, gracias a lo que alguien calificó como “el arma mágica del mercado”.

En marzo de 1993, con ocasión de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular -cuyas principales tareas eran adaptar la Constitución a las resoluciones del XIV Congreso y sustituir formalmente al retirado Yang Shangkun como jefe de Estado por Jiang Zemin-, el Secretario General del partido expuso públicamente los temores de un importante sector de la dirección de que el recalentamiento de la economía estuviese cocinando una nueva explosión social y su impotencia para poder aplicar frenos desde el Estado central al *boom* inversor de las provincias. A finales del mes de abril, el Primer Ministro Li Peng sufrió un ataque al corazón, que le apartó de toda actividad pública, y en junio Zhu Rongji se vio obligado a anunciar un nuevo plan de ajuste, acompañado de las reformas anunciadas por el XIV Congreso pero todavía no emprendidas.

“Si en 1992 se registraron 47.000 empresas mixtas, en los cuatro primeros meses de 1993 la cifra sobrepasó las 100.000”

Entre las medidas concretas de este plan de ajuste inmediato hay que señalar la prohibición pura y simple de unas 1.000 ZEE, de las que sólo se han legalizado finalmente 30 para el año 1992. Su hipotético desmantelamiento supondría la restitución a la agricultura de unos 6.000 km² de terreno. Asimismo, se ordenó la paralización inmediata de la construcción de los miles de campos de golf que están surgiendo en las provincias costeras, hoteles e infraestructura turística. El Banco de China ha cerrado totalmente la concesión de nuevos créditos, y ha ordenado a sus ramas locales la devolución de todos los concedidos sin previa autorización central (unos 100.000 millones de yuanes) antes del 15 de agosto, elevando las tasas de interés para los depósitos y cuentas de ahorro. La congelación de créditos ha sido acompañada de la de los salarios del sector público, que, de acuerdo con las autoridades, habían crecido un 21,7% en los primeros seis meses de 1993, y un 38% las primas extraordinarias, en tanto que los sueldos de los trabajadores del sector privado lo habían hecho en un 68% en el mismo período.

La tercera sesión plenaria del XIV Comité Central del PCCh se reunió en Beijing, del 11 al 14 de noviembre de 1993, para discutir la situación de la economía y las medidas propuestas por la "Comisión para una nueva etapa de las reformas" creada por Zhu Rongji en junio. El clima de la reunión no podía, por otra parte, ser más preocupante: Deng Xiaoping no había podido celebrar, el 22 de agosto, su 89 cumpleaños con el acostumbrado baño de mar, por prohibición facultativa, mientras que tres días antes había reaparecido en bañador Li Peng, coincidiendo con el anuncio de una nueva campaña anticorrupción en toda China.

El futuro de las reformas económicas

El gradualismo de las reformas económicas chinas, el método de "cruzar el río tirando piedras delante de una en una", había llegado a sus límites a finales de 1993³ y los cuellos de botella amenazaban con bloquearla, manteniendo la existencia de distintos mercados provinciales e impidiendo su unificación a escala nacional. La gestión administrativa, mediante decretos, de las autoridades centrales era ya incapaz de sustituir a un marco legal en el que el

mercado pudiera coordinar las distintas actividades económicas. A lo largo de 1992 se intentó llenar este vacío con la promulgación de leyes sobre patentes y marcas, aduanas, sobre la constitución de sociedades anónimas y el funcionamiento de las bolsas de valores y el 1 de julio de 1993 se introdujo un nuevo sistema de contabilidad nacional para las empresas y de auditoría pública. En contradicción con esta centralización, pero reflejo de la nueva correlación de fuerzas entre el centro y las provincias, se autorizó a la ZEE de Shenzhen a promulgar su propia legislación.

Pero los dos instrumentos básicos de actuación del Estado en el nuevo marco, la reforma general del sistema bancario, que convirtiese al Banco de China en un banco central autónomo con capacidad de regular un mercado de créditos interbancarios, y la puesta en pie de un sistema impositivo y fiscal general, se encuentran todavía en fase de preparación.

De todos los problemas a los que se enfrenta la reforma, el más importante y revelador es el del sistema fiscal. Una reciente investigación (Wong, 1991; World Bank, 1993) ha permitido comprender la lógica que está detrás de las relaciones entre las autoridades centrales y la nomenclatura provincial, el creciente déficit presupuestario central, que es paralelo a una reducción de los recursos provinciales, y la presión continua por la inversión industrial como medio de hacerle frente, explicando los ciclos de boom y frenazo de estos años.

Hasta finales de los años setenta, el sistema de precios tenía en China, como en la URSS, la misión de transferir el sobreproducto social de la agricultura y de los sectores productores de materias primas a la industria, cuyos altos beneficios la convertían en la base del sistema presupuestario, hasta llegar a representar el 90% de sus ingresos a comienzos de los años ochenta. Las reformas han tenido dos efectos paralelos que se han reforzado: la descentralización de la gestión de las empresas públicas del centro a las provincias ha estado acompañado de un recorte de las subvenciones centrales, que ha ido reduciendo los beneficios industriales a medida que se realineaban los precios con el sector primario. Beneficios que han caído, asimismo, como efecto de la creciente competencia producida por la inversión industrial del ahorro

rural en las nuevas empresas privadas y colectivas. Hasta el punto que las provincias más pobres de China son aquellas en las que las empresas públicas contribuyen más al PIB provincial, llegando al 83% en Qinghai, mientras que en las seis provincias costeras este porcentaje se sitúa alrededor del 30%.

Así, mientras los ingresos fiscales totales han caído de un 29,4% del PNB en 1980 a un 17% en 1992, la parte retenida por el centro y las provincias, después de transferencias, ha variado de una proporción de 59/41 a otra de 45/55, que suponían en 1992 ingresos equivalentes a un 7% y un 9,9% del PNB. Pero la responsabilidad en los gastos ha cambiado en los mismos años de una proporción de 68/32 a otra de 43/57, que suponían en 1992 un 8,4% y un 11,1% del PNB. Es decir, el centro ha ido descargando sobre las provincias su propia debilidad y su déficit fiscal. Y, al mismo tiempo, ha buscado aumentar su parte en los ingresos volviendo a tomar el control de la gestión de las empresas más rentables en

sectores como el automóvil, el tabaco, la petroquímica, los metales no ferrosos

y el transporte marítimo, imponiendo, además, impuestos directos sobre la energía y los minerales no ferrosos.

En 1988 se implantó un sistema fiscal contractual entre el centro y las provincias, divididas en seis grupos, que permitió una postura negociadora más

fuerte a las provincias con mayor base fiscal, es decir con un sector no público más desarrollado. Por ejemplo,

Shanghai y Guangdong han cedido al centro una mayor proporción de sus ingresos a cambio de poder expandir sus créditos bancarios por encima de los depósitos u obtener mejores condiciones para la inversión extranjera. Cuando los contratos fiscales iniciales expiraron en 1990, las autoridades provinciales se negaron a una renegociación general, aunque en la práctica el forcejeo centro-provincias ha sido continuo. Para evitar su propio déficit, las autoridades provinciales buscan aumentar su base fiscal mediante la impulsión del sector no público (ampliando crédito, gracias a su control de las ramas provinciales del Banco de China y

la extorsión de los fondos “extrapresupuestarios” del sector público que gestionan, que han supuesto en 1991 hasta un 53,4% del total de la inversión en capital fijo) y la creación de ZEEs, con ayuda de la inversión extranjera. No es de extrañar que después protejan por todos los medios a su alcance su industria provincial de cualquier competencia, china o extranjera, duplicando inversiones a nivel de todo el país y los cuellos de botella, con la consiguiente reducción general de rentabilidad.

En esta piedra tropieza toda la política de reformas del sector público. Porque para reestructurarlo es necesaria una reforma completa de los precios, que se promete realizar en tres años, acabando con el sistema dual actual y las subvenciones. En 1992 se avanzó en este camino, reduciendo el control de precios de los bienes de producción de 737 mercancías a 89, de manera que en 1993 sólo el 20% de estos bienes seguía bajo control, el 10% de los de consumo y el 17% de los agrícolas. Ese “sólo”, sin embargo, seguía afectando a sectores estratégicos como la energía, el cemento, los transportes y los cereales, en los que la reducción parcial de las subvenciones provocó la oleada inflacionista y la caída de beneficios consiguiente del sector industrial. En efecto el 80% de las pérdidas del sector público, según Thomas Rawski (*The Economist*, 28 de noviembre de 1992), se deben en un 40% a las empresas de carbón y la petroquímica, obligadas a vender por debajo de costes, un 11% a la industria militar y un 25% al sector público de dos provincias costeras, Jiagsu y Zhejiang, en las que la competencia con el sector no público ha acabado con todo beneficio.

La reestructuración de las empresas públicas, tras la nueva regulación de julio de 1992, que busca convertirlas en sociedades anónimas cotizables en bolsa, se está convirtiendo en una búsqueda desesperada de capital con el que aumentar su productividad y cambiar una tecnología completamente desfasada que, en más de un 70%, tiene su origen en los años 50 y en la URSS. Los nuevos administradores de estas empresas, cuyos privilegios y salarios dependen del rendimiento comercial de las mismas y no ya de su jerarquía en la nomenclatura, se ven obligados a ceder sus fondos “extrapresupuestarios” a las autoridades

“Las provincias más pobres de China son aquellas en las que las empresas públicas contribuyen más al PIB provincial”

locales, pero a cambio consiguen el monopolio de sus mercados provinciales. Esta alianza tácita y el miedo a un desempleo que podría alcanzar rápidamente a cerca de 100 millones de trabajadores, que no cuentan con otra red de asistencia social que la proporcionada por las empresas públicas, explica que, a pesar de que la ley de bancarrota fuese promulgada en 1986, no se haya utilizado en la práctica más que en muy contadas ocasiones.

De la misma manera que después de 1984 la productividad del sector agrícola cayó de un 8% a un 4% como consecuencia de los rendimientos decrecientes⁶, después de 1992, y a pesar del crecimiento vertiginoso de la producción, está teniendo lugar una importante caída de los beneficios en el sector industrial, afectando en primer lugar al sector público pero también paulatinamente a los sectores no públicos, por efecto de la competencia, provocando a su vez un rendimiento decreciente de los ingresos fiscales. Las autoridades de las provincias costeras pretenden escapar a esta situación recalentando la economía; la nomenclatura del interior elevando los precios de los productos agrícolas y las materias primas; y el aparato central del Estado aplicando políticas de ajuste que le permitan recuperar el control sobre su déficit presupuestario y sobre el conjunto del país, amenazando con que, de no tener éxito, puede ocurrir una catástrofe social que acabe no sólo con la "dictadura democrática popular" sino también con sus privilegios.

En este sentido, la utilización del "arma mágica del mercado" se convierte para todos los sectores de la burocracia china en una huída hacia adelante, cuya principal estrategia es la inserción creciente en el mercado mundial, hasta su reintegración en el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y la liberalización completa de su sector exterior en 1997, de acuerdo con el memorándum firmado en octubre de 1992 con Estados Unidos⁷. El sector exportador representa ya más del 20% del PNB y China se ha convertido en el decimotercer exportador mundial, después de doblar en diez años su porcentaje en el comercio internacional. El "puño tembloroso" de la burocracia de Beijing espera, a través de la generalización de las ZEEs, que la "mano

invisible" del mercado mundial acabe por imponer su disciplina a las distintas autoridades provinciales y sus mercados, utilizando su ansia de inversiones extranjeras, y las unifique en un marco único donde recupere su hegemonía.

Entre la corrupción y el neautoritarismo

La generalización de esta peculiar "ley del valor" ha permitido una rápida dualización de la economía del país, cuyo principal beneficiario ha sido la nomenclatura del partido, que ha utilizado su monopolio de facto para incrementar sus privilegios de manera vertiginosa, reponiéndose del "síndrome de la Revolución Cultural". Su papel de mediadora en un país cuya economía se encuentra compartimentada en diferentes niveles de productividad, precios y mercados le ha permitido, primero, crecer como capa social, pasando en diez años del 1,5% al 4,4% de la población activa, integrando en el PCCh a 7,51 millones de nuevos miembros después de Tienanmen y, más tarde, enriquecerse con una corrupción especulativa que representa, según el Banco Mundial, alrededor de un 9% de la renta nacional.

La corrupción nace así de la misma lógica del sistema y cumple un papel esencial en los mecanismos de acumulación, incrementándose con cada ciclo económico. Pero, al mismo tiempo mina la legitimidad social en la que se sostiene el monopolio político de la burocracia y alimenta la tensión social. Un mecanismo de transformación de la burocracia en burguesía es la participación de los hijos de los cuadros del partido en la dirección de las nuevas empresas colectivas y privadas, en especial en el sector del comercio exterior, que llega a ser de un 90% en las ZEEs y de un 70% en Shanghai.

Entre 1980 y 1988 el número de crímenes económicos investigados se triplicó, con especial incidencia en 1982 (60.129 casos) y 1986 (81.591 casos). Un 73,4% de estas denuncias fueron por soborno y apropiación de fondos públicos. Tras algunos antecedentes, como por ejemplo los mandos de la Marina de guerra en la ZEE de Hainan en 1984, la corrupción ha comenzado a ser una práctica no sólo individual sino corporativa, que afecta a direcciones de empresas y autoridades locales, en especial después de 1988 con la campaña de "rectifi-

cación” económica, durante la cual las investigaciones abiertas por corrupción por la fiscalía general se redujeron en un 13%. A pesar de ello, en la primera mitad de 1993 fueron más de 30.000 los funcionarios del partido y el gobierno acusados de estos delitos.

Dos casos han sido especialmente significativos para comprender la naturaleza de esta corrupción generalizada. El primero ha afectado al Banco de China, de donde han desaparecido en los últimos diez meses 28.000 millones de dólares (las reservas del divisas de país se cifraban en 19.810 millones de dólares), de los que unos 10.000 millones habrían sido sacados al extranjero. Más de 90 altos funcionarios del Banco han podido escapar del país, en una trama en la que estaba implicada la casi totalidad de las sucursales provinciales (*The South China Morning Post*, 22 de agosto de 1993).

El segundo caso es ejemplar en otro sentido. Se trata de la detención, bajo acusación de asesinato, de Yu Zoumin, jefe de la aldea de

Daqiu, cerca de Tianjin, que había sido elevado a la categoría de modelo

nacional y elegido como

delegado al XIV Congreso del PCCh por su éxito en la creación de empresas privadas, que le habían convertido en multimillonario.

Las primeras investigaciones revelaron un régimen de terror en Daqiu, cuyos habitantes habían sido

sometidos a la semiesclavitud por la mafia organizada por las

autoridades locales, que resistieron

durante días a la policía de Tianjin (*Le Monde*, 30 de agosto de 1993).

Este marco social, con una creciente polarización social y el desarrollo de una clase obrera industrial urbana, ha sido la causa principal del abandono en la práctica de cualquier resto de connotación ideológica marxista y maoísta por parte de la burocracia, que ha reducido su utilización a la justificación histórica del nacimiento de la República Popular (como se hizo patente durante las celebraciones del centenario del nacimiento de Mao Zedong, el 26 de diciembre de 1993) y la adopción de una nueva ideología

neautoritaria que le permita no sólo cohesionarse socialmente sino gestionar la reforma de sus instituciones administrativas, dotándose de una nueva legitimidad en el desarrollo de las relaciones mercantiles de la economía. Merece la pena hacer un breve recorrido por ella.

El principal proponente de la doctrina, Wu Jiaying⁸, remonta su nacimiento a una serie de debates en la Universidad de Fudan, en Shanghai en 1986, cuando un grupo de estudiantes, bajo la dirección del profesor Wang Huning, realizó un seminario sobre las características del desarrollo económico en los nuevos países industrializados (NICs) del Sudeste Asiático a partir de la obra de Samuel Huntington.

Según Wu Jiaying el neautoritarismo ha sustituido al «centralismo tradicional» en la filosofía política moderna, porque no se trata tanto de una autoridad autocrática que niegue las libertades individuales, como de un medio para eliminar los obstáculos para su desarrollo, entendido como libertad económica. El desarrollo social habría pasado por tres etapas: el «viejo autoritarismo» autocrático, en el que prevalecía una economía de subsistencia; la libertad individual «bajo la protección del neautoritarismo» o «nueva autoridad», en la que una autocracia ilustrada crea un semi-mercado regulado para sustituir a la economía de subsistencia, y, en último lugar, la plena economía mercantil y la democracia liberal. Ninguna sociedad puede saltarse estas etapas sin caer en la desintegración. El desarrollo de la “gran democracia” en la actual fase de la reforma china sólo puede acelerar la descentralización y negar la libertad económica. Únicamente una autoridad fuerte y centralizada puede destruir a la «vieja autoridad» y asegurar la estabilidad necesaria para eliminar los obstáculos de la libertad. Lo importante de la «nueva autoridad» no es tanto la estructura política como el dirigente “ilustrado”, rodeado de consejeros y contrapesado por la “disidencia intelectual”, que debe crear las condiciones de la acumulación de capital, orientar la distribución de recursos y mantener la ley y el orden. Para Wu, el neautoritarismo es la versión china del “liberalismo conservador económico”.

“Un ejemplo de corrupción generalizada: en el Banco de China han desaparecido 28.000.000 \$ en los últimos diez meses”

Rong Jian, uno de los principales inspiradores junto con Wu de la doctrina, profesor de la Universidad del Pueblo de Beijing, considera difícil la instauración del neoautoritarismo en China, porque carece de las «tres condiciones para una separación de la política y la economía», que en su opinión caracterizaban a los NICs: propiedad privada, mercado único "regularizado" y empresas y empresarios independientes. Si no se resuelve el problema de la privatización del sector público, el neoautoritarismo puede ser utilizado para frenar las propias reformas.

Otro de los autores más interesantes del neoautoritarismo es Xiao Gongqin. Xiao cree que la causa de las crisis cíclicas de la reforma económica se debe a una erosión de la legitimidad política de la autoridad de Deng Xiaoping, y a un debilitamiento de la capacidad de intervención central del Estado frente a «factores inestables» que escapa a la acción del mercado, como la explosión demográfica, la reducción de tierras cultivables por la erosión, inundaciones por relajamiento de la política hidráulica, paro y la «crisis moral de la sociedad». La inflación y la descentralización económica se suman a este ciclo vicioso de inestabilidad, que agrava la erosión del poder. China ya ha perdido una vez la oportunidad de una «transición neo-autoritaria», mediante la implantación de la "Nueva Democracia" en 1950, y corre un peligro semejante hoy si no se refuerza el poder central frente al "viejo autoritarismo" y el "romanticismo político de los intelectuales antiautoritarios".

La vitalidad y fuerza del movimiento democrático se puso de manifiesto en las críticas formuladas al neoautoritarismo por autores como Qin Xiaoying, Guo Suijian, Zhang Xiaogang y Chen Ziming, en marzo y abril de 1989, en un seminario organizado por la Universidad del Pueblo de Beijing. Sus argumentos pueden resumirse en siete puntos: el modelo evolutivo en tres etapas de Wu no tiene referentes históricos y es una construcción intelectual; la democracia puede desarrollarse paralelamente a una economía mercantil, y así sucedió en Europa en la transición del feudalismo al capitalismo; no se debe asociar democracia y anarquía o descentralización, puesto que han existido Estados fuertes democráticos; sólo la democracia permite combatir la

corrupción que nace de las posiciones de monopolio del poder; el neoautoritarismo confunde la formulación de políticas, que puede ser democrática, con su aplicación administrativa, que puede exigir medidas duras de un Estado fuerte; el neo-autoritarismo menosprecia la reforma del sistema y las instituciones y se concentra sólo en el papel de los individuos, y por último, la explicación del neoautoritarismo en el desarrollo económico de los NICs no tiene en cuenta la actividad de los propietarios en la sociedad civil y sólo se fija en el intervencionismo estatal. Pero quizás la crítica más explosiva la hizo Gao Gao cuando recordó que el mejor ejemplo de déspota ilustrado había sido el mismo Mao Zedong: "el día que la ilustración toca al poder y sus intereses, queda ahogada por el peso de la autocracia".

Wu Jiaxiang ha refinado sus argumentos después de estas críticas y de Tienanmen, reforzando el condicionante evolutivo. La democratización debe ir por detrás del desarrollo del mercado: mientras que éste es limitado e imperfecto, los costes del consenso asociados con la participación democrática crecen a un nivel excesivo porque las personas buscan privilegios políticos en vez de derechos económicos. La participación política en condiciones de mercado limitadas no conduce a una mayor autonomía de la economía, sino a un intento de su control desde posiciones de poder monopolistas, que fraccionan el mercado en redes clientelares. De ahí la necesidad de asegurar la capacidad de intervención central en la economía del Estado. Sólo cuando el mercado se desarrolle, definiendo y diversificando los intereses y riesgos económicos, será posible un "contrato político" entre electores y elegidos en un marco pluralista, que reduzca el proceso de toma de decisiones público al mínimo y el coste social y político del consenso, entendido como equilibrio de intereses.

La taiwanización del *Kuomintang*

El *Kuomintang* (Partido Nacionalista Chino, KMT) ha vivido desde finales de la década de los años ochenta un proceso de erosión de su legitimidad política y social en Taiwan, paralelo al que ha sufrido en China continental el PCCh, que puede terminar con su control absoluto desde 1949 sobre la isla, en las elecciones presidenciales directas previstas para 1996.

El proceso de transición democrática se inició en Taiwan con el levantamiento de la ley marcial y la legalización de los partidos opositores, en especial el Partido Progresista Democrático (PPD), en febrero de 1987, después de que los candidatos del todavía ilegal PPD recibieran el 25% de los votos en las elecciones parciales a la Asamblea Nacional en diciembre de 1986. En enero de 1988 asumió la presidencia, tras la muerte Chiang Ching-kuo, el entonces vicepresidente, Lee Teng-hui, de origen taiwanés, que pocos meses después anunció, en el XIII Congreso del KMT, un paquete de medidas para la reforma política, cuyo principal elemento era la dimisión voluntaria de los representantes de las provincias de China continental en las tres cámaras legislativas, elegidos en 1947. El proceso de democratización del Estado en Taiwan pasaba por hacerlo responsable y representativo de sus habitantes. Pero cualquier fórmula que no fuera la dimisión voluntaria de los antiguos representantes del

continente suponía romper con el principio de legitimidad democrática en la que se fundamenta la pretensión de soberanía del gobierno nacionalista de Taipei sobre toda China.

“La crisis del Kuomintang siguió agravándose a lo largo de 1993”

A pesar de las generosas ofertas económicas de jubilación, los viejos representantes continentales se rebelaron, intentando en febrero de 1990 convertir la Asamblea Nacional en una cámara alta con capacidad de veto, aprobando una subida sustancial de sus sueldos e intentando organizar para la Presidencia una candidatura conservadora del KMT, alternativa a la de Lee Teng-hui. La “resistencia geriátrica” provocó, un año después del de Beijing, un Tienanmen taiwanés. Miles de estudiantes se concentraron en el parque Chiang Kai-shek, gritando las mismas consignas: democracia, libertad de expresión y el fin de un gobierno dominado, en este caso, por la “generación nacionalista”. La diferencia fue que en Taiwan los estudiantes ganaron. Lee fue elegido presidente por una “reducida mayoría” del 95%, como señaló irónicamente algún periódico de la isla, y prometió convocar una Conferencia de

Asuntos Nacionales para discutir las reformas constitucionales.

Sin embargo, en mayo de ese mismo año, Lee intentó superar la división producida en el seno del KMT con la designación como primer ministro del general conservador y ministro de Defensa, Hao Pei-tsun. Las manifestaciones volvieron a recorrer Taipei al grito de “¡Los generales vienen, la democracia se va!”. Varios edificios gubernamentales fueron incendiados, mientras los representantes del PPD en la Asamblea Nacional boicoteaban la aprobación del nombramiento. El año y medio que siguió fue un continuo forcejeo entre el movimiento democrático, el gobierno y la fracción conservadora del KMT. En junio se reunió la Conferencia de Asuntos Nacionales, que aprobó la celebración de elecciones directas a la presidencia, de manera que el jefe del Estado fuera elegido por los ciudadanos de Taiwan y no por la Asamblea Nacional de 1947. Ese mismo mes, el Consejo Superior de Justicia dictaminó que los representantes continentales en las tres cámaras debían dimitir antes del 31 de diciembre de 1991, y en diciembre Lee anunció el fin del Estado de guerra y el próximo levantamiento del Estado de emergencia en marzo de 1991, para la celebración, a finales de ese mismo año, de elecciones generales para una nueva Asamblea Nacional, seguidas en 1992 de las de la Cámara Legislativa y, en 1993, de la Cámara de Control.

En abril de 1991, cuando la Asamblea Nacional debía aprobar las reformas constitucionales que suponían su suicidio, más de 20.000 manifestantes volvieron a la calle en apoyo del PPD y el proceso de democratización. Las movilizaciones continuaron durante todo el verano y el otoño, pidiendo la independencia de Taiwan y su ingreso en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), mientras el congreso del PPD aprobaba una moción exigiendo al gobierno la proclamación de la República de Taiwan, lo que provocó una dura reacción tanto del KMT como del PCCh.

Las elecciones a la Asamblea Nacional, el 21 de diciembre de 1991, se convirtieron en un plebiscito sobre la independencia de Taiwan o el mantenimiento del principio de reunificación de China. Pero el PPD sufrió una derrota humillante, obteniendo sólo el 22,78% de los

votos (5% menos que en las elecciones a la Cámara Legislativa en diciembre de 1989) frente al 67,72% del KMT. La polarización política de los últimos meses no había sido capaz de romper, a pesar de la radicalización del movimiento democrático, el sistema clientelar de favores económicos y corrupción política del KMT^o, que, por otra parte, hizo una inteligente campaña basada, no en la reafirmación de la legitimidad nacionalista sobre toda China, sino sobre el mantenimiento del *statu quo* y de su política económica nekeynesiana, que preve un plan de infraestructuras por valor de 303.000 millones de dólares en la década de los noventa.

La victoria del KMT no hizo, sin embargo, disminuir la tensión política. Mientras que el partido del gobierno se atrincheraba en la nueva Asamblea Nacional y reforzaba sus poderes sobre las otras cámaras, en previsión de tiempos peores, el movimiento democrático continuó con sus manifestaciones de decenas de miles de personas por la independencia y la celebración de elecciones presidenciales directas, a pesar de una creciente represión sobre sus organizaciones más radicales.

La campaña para las elecciones a la Cámara Legislativa, en diciembre de 1992, volvió a repetir un escenario parecido al de la Asamblea Nacional. Pero esta vez, el PPD hizo más hincapié en la corrupción del gobierno, en especial del primer ministro, el general Hao Pei-tsun, en relación con el nuevo sistema fiscal sobre bienes raíces -que había provocado la dimisión en protesta de dos ministros pocos meses antes-, la gestión de los fondos sociales del ejército y el faraónico plan de infraestructuras, subordinando la reivindicación independentista a la de la democratización. En esta ocasión, la proporción de votos fue de 31% para el PPD, superando las esperanzas de la oposición, un 53% para el KMT y un 8% para las candidaturas críticas no oficiales del propio Partido Nacionalista.

Los resultados abrieron la crisis del KMT, dividido entre su corriente conservadora, opuesta a toda elección directa presidencial y defensora de la política de "una sola China", encabezada ahora por Hao Pei-tsun, y la corriente gubernamental, mayoritaria, del presidente Lee, que busca hacer del mantenimiento del *statu quo* de la isla un proceso de

transición basado en una taiwanización y democratización controlada. El primer ministro Hao se vio obligado a dimitir, junto con el Secretario General del KMT, a favor del taiwanés Lien Chang.

La crisis del KMT siguió agravándose a lo largo de 1993. Seis días antes de la celebración de su XIV Congreso, los diputados elegidos en las candidaturas críticas, incluyendo los dos exministros, anunciaron la formación del Nuevo Partido Chino (NPCh), amenazando con un proceso similar al que había acabado con la hegemonía del Partido Liberal Democrático en Japón. El congreso, rodeado de manifestantes independentistas, fue, sin embargo, un éxito para Lee Teng-hui, que no sólo fue reelegido como Presidente del KMT, en la primera votación secreta celebrada en el partido, con el 82,5% de los votos, sino que consiguió arrinconar definitivamente a la corriente conservadora, en un paso decisivo en la taiwanización del KMT, cuyo principal objetivo es vaciar de contenido el programa político de la oposición democrática.

Muestra de esta taiwanización fueron las puntualizaciones del representante de Taipei en la reunión de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Seattle, el 21 de noviembre, el ministro de Economía P.K. Chiang, a las declaraciones de Jiang Zemin de que sólo existe "una China": ahora hay "dos naciones soberanas a cada lado del estrecho de Taiwan" y que el objetivo de su gobierno era "una política transitoria de dos Chinas" (*The Economist*, 27 de noviembre de 1993). Un mes más tarde, las conversaciones bilaterales iniciadas entre Beijing y Taipei en el mes de abril en Singapur, que después de varias rondas en la República Popular habían continuado en Taiwan durante el mes de diciembre, acabaron sin ningún acuerdo sobre los temas tratados -repatriación de secuestradores, problemas pesqueros y emigración ilegal- por la total negativa de Beijing a reconocer la jurisdicción de los tribunales de Taiwan (*International Herald Tribune*, 23 de diciembre de 1993).

A pesar de ello, las elecciones locales del 27 de noviembre han vuelto a producir una nueva erosión del voto del KMT, que ha obtenido el 47,5%, frente al 41% del PPD, el 8,4% de los independientes y el 3% del NPC, que sólo

presentó dos candidatos, en una campaña en la que la máquina clientelar del KMT hizo un esfuerzo sin precedentes. Ello puede obligar a Lee a evitar nuevas confrontaciones y adelantar las elecciones presidenciales, previstas para 1996, antes de que la oposición democrática pueda encontrar un candidato capaz de hacerle frente con posibilidades de éxito.

La crisis de Hong Kong

La declaración conjunta sino-británica de 1984 preve la devolución de la soberanía de la Colonia británica a la República Popular de China el uno de julio de 1997, de acuerdo con la fórmula de “un país, dos sistemas” que debe permitir mantener a Hong Kong un amplio grado de autonomía política interna y su sistema económico capitalista durante al menos 50 años, como una “región administrativa especial” de China. Ninguna de las partes firmantes de la declaración sintió la menor necesidad de preguntar a los habitantes de la colonia su opinión al respecto.

“El único interés político que se les suponía a los hongkonitas era el de hacer dinero”

En general, el único interés político que se les suponía a los hongkonitas era el de hacer dinero, pagando los impuestos estrictamente imprescindibles para mantener un gobierno gestor de obras públicas y de la seguridad urbana. La demostración de que esta imagen era completamente falsa

fueron las manifestaciones de más de un millón de personas que a lo largo de dos semanas protestaron en mayo y junio de 1989 contra los sucesos de Tienanmen. Exigían democracia en el continente y en la colonia, y establecían las bases de un movimiento ciudadano que desafiaba abiertamente la pretensión de Beijing de que el proceso de retorno de la soberanía de la colonia a China es, ante todo, un proceso voluntario de convergencia de sus sistemas políticos, ayudado por el hecho de que las inversiones de capital de Hong Kong en la República Popular se acercan ya a los 30.000 millones de dólares (en 25.000 empresas que dan trabajo a 3 millones de personas) y que las de Beijing en la colonia pueden haber superado los 20.000 millones.

Después de prolongadas negociaciones entre China y Gran Bretaña, la Ley Básica que debe servir de marco legal para el período de transición hasta 1997 y los siguientes 50 años fue adoptada finalmente por el Consejo Legislativo (Legco) de Hong Kong, cuyos miembros, hasta ese momento designados por el gobernador, serían paulatinamente elegidos por mecanismos democráticos: 18, de los 60, en 1991 y 12 más, hasta un total de 30, en el año 2003.

En las primeras elecciones la totalidad de los 18 escaños en juego fueron ganados por los partidos del movimiento democrático: 12 por los Demócratas Unidos de Hong Kong (DUHK), de Martin Lee, tres por Punto de Encuentro y uno por la Asociación por la Democracia y el Bienestar del Pueblo (ADBP). El Director de la Oficina de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de la República Popular, Lu Ping, denunció las elecciones alegando que varios de los candidatos, como Martin Lee, Leong Che-hung y Szeto Wah, eran “contrarrevolucionarios”, y que la tasa de participación en las elecciones “sólo había sido de un 40%”. Para el resto de los partidos políticos, de orientación conservadora y representados en el Legco mediante designación directa -la Alianza Democrática para el Progreso de Hong Kong (ADP), de Y.S. Tsang, el Partido Liberal y la Federación de Empresarios y Profesionales de Hong Kong (FEP)-, las elecciones supusieron un revulsivo que “ponía en peligro la estabilidad económica de la colonia”.

1991 fue también testigo del enfren-tamiento entre las autoridades chinas y británicas sobre el futuro del nuevo aeropuerto de Hong Kong en Chek Lap Kok, un proyecto faraónico de 22.000 millones de dólares, con contratos preferenciales para las compañías británicas, que la República Popular consideró un despilfarro de la tesorería de la colonia. Sólo tras conceder una mayor capacidad de control sobre el proyecto y los contratos a Beijing, a cambio de garantías de pago después de 1997, pudo Londres obtener un Memorandum de Entendimiento, que firmó el primer ministro británico John Major, en septiembre de 1991, en el primer viaje de un jefe de gobierno occidental a la capital china después de Tienanmen, durante el que Major tuvo que sufrir la humillación de pasar revista en la misma plaza de los sucesos a la guardia de honor del EPL.

La tensión de la visita provocó que pocos meses después el gobernador David Wilson dimitiera y, en su lugar, Major designara a su principal consejero en la campaña electoral conservadora, Christopher F. Patten. Nada más tomar posesión de su cargo, el 7 de octubre de 1992, Patten anunció al Legco un plan de cinco años para el "desarrollo constitucional" de la Colonia en todos aquellos aspectos no previstos por la Ley Básica, que permitiría la democratización de Hong Kong, tras la aprobación correspondiente por el propio Legco.

El plan de Patten no preve un aumento del número de escaños elegidos directamente, pero sí la ampliación a 30 de las 21 circunscripciones "funcionales" actuales, que deberán votar los restantes escaños del Legco, abriendo el abanico de las profesiones con derechos a voto (que actualmente sólo se extiende a las profesiones liberales) hasta alcanzar unos 2/3 de la población mayor de 18 años. Paralelamente, en 1995 se elegirían directamente todos los cargos de los Consejos Municipales y de Distrito, entre cuyos miembros se escogerían los 800 delegados al Comité Electoral que designaría al nuevo ejecutivo. Un ejecutivo (Exco), cuyos miembros no podrían compatibilizar su trabajo con los del Legco, como hasta entonces.

La reacción de Beijing fue fulminante. Zhu Rongji preguntó directamente a Major durante su visita oficial a Londres, un mes más tarde, si no sería mejor romper directamente la Declaración Conjunta de 1984. En enero de 1993, Lu Ping advirtió que, de aprobarse en el Legco el plan de Patten, sus miembros perderían sus escaños en julio de 1997 y la República Popular organizaría una estructura administrativa paralela en Hong Kong, que se haría cargo del gobierno de la colonia en esa fecha, anulando todos los contratos para el nuevo aeropuerto que no tuviesen el visto bueno de Beijing, a pesar de que dos meses antes se habían iniciado las primeras obras de acondicionamiento del terreno, por valor de 1.200 millones de dólares. El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong cayó inmediatamente un 25% y los partidos conservadores se distanciaron del plan Patten, acusándolo de poner en peligro la estabilidad económica de la colonia, mientras que los partidos democráticos amenazaron con una campaña de movilizaciones, que tendría los

mismos efectos, si se retiraba el plan. El 13 de marzo, Patten registró el proyecto de ley para la reforma electoral sin contar con la aprobación de Beijing.

En abril se abrieron, finalmente, nuevas negociaciones sino-británicas sobre el plan Patten, que se encontraba ya en minoría en el Legco. Pero, tras 17 rondas de conversaciones, no se produjo el menor avance. Patten, por su parte, decidió dividir su plan en dos, con la intención de ganar los votos del Partido Liberal para un primer paquete de reformas, que incluye la reducción de la edad de voto a los 18 años, la elección directa a los Consejos Municipales y la elección de un sólo representante por cada circunscripción "funcional" del Legco en 1995. Pero el 27 de diciembre las autoridades chinas anunciaron oficialmente su intención de abolir el Legco el uno de julio de 1997, así como los Consejos Municipales y de Distrito, "reorganizados de acuerdo con la Ley Básica y las decisiones de la Asamblea Nacional Popular" (Xinhua, 27 de diciembre de 1993). Para que no hubiese ninguna duda, tres días más tarde, el director de la agencia Xinhua en Hong Kong, y representante oficioso de Beijing, Zhou Nan, informó que el "Comité Preparatorio de Trabajo" -que agrupa a 30 asesores de Hong Kong y 27 del continente- empezaría a discutir inmediatamente la forma que debería adoptar el gobierno de la excolonia en 1997, contando con la colaboración de personalidades de todas las esferas de Hong Kong.

No se trata tanto de establecer un peligroso precedente de dualidad de poder, como de minar toda legitimidad del proceso de democratización de Hong Kong antes de 1997, con el apoyo de los grandes capitales de la colonia o invertidos en ella. Durante los tres últimos años, y gracias a su posición de mediadora entre las ZEEs del continente y el mercado internacional, Hong Kong ha vivido un boom económico especulativo que ha hecho saltar el índice Hang Seng de su Bolsa de un 239% a finales de 1990 al 10.250% a finales de 1993, elevando el PNB por habitante hasta los 19.000 dólares, aunque los salarios, gracias a las reservas del mercado laboral continental, se han mantenido por debajo de este crecimiento del PNB por habitante, a diferencia de lo ocurrido en Taiwan o Corea del Sur. Una parte importante de los

beneficios realizados se retiraron de la Bolsa, donde cotizan cerca de ochenta compañías del continente, a fin de año, pero es previsible que fluyan durante 1994 nuevos fondos de inversión norteamericanos y europeos. Y para todos estos capitales la estabilidad sólo puede ser garantizada ya por Beijing, como demuestra que más de la mitad de los bonos emitidos durante este año se extiendan más allá de 1997.

El problema es que esta prosperidad especulativa, que ha transformado a Hong Kong en una inmensa base de servicios, en la que trabajan tres cuartas partes de su población activa, depende estrictamente de que se mantengan las expectativas de beneficios, tanto en las inversiones productivas en China continental como en las propias empresas de servicios de la colonia, que hasta ahora se han defendido de la competencia gracias a sus relaciones personales privilegiadas con las autoridades centrales y provinciales chinas. Los primeros indicios de crisis en el continente se convertirán en retiradas de capital en Hong Kong, como ocurrió en 1982.

En su discurso, el 22 de noviembre de 1993, a una conferencia de inversores chinos de ultramar, celebrada en Hong Kong, el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, explicó así este proceso: “Después de Tienanmen, el 4 de junio de 1989, Japón y Occidente frenaron su turismo y sus inversiones hacia China. Durante este período crítico, los chinos de Hong Kong, Macao y Taiwan aprovecharon la oportunidad y aumentaron su comercio y sus inversiones, aprovechando la creciente economía de mercado en China. Tras este éxito se sumaron también los chinos del Sudeste asiático. Tres años más tarde, en 1992, los resultados han asombrado al mundo. El crecimiento de China ha sido superior al 12% anual. Y ha sido esto lo que ha hecho renacer el interés en China de América, Europa y Japón” (*The Economist*, 27 de noviembre de 1993).

Sobre este panorama de prosperidad sin precedentes, en medio de la recesión internacional, pueden surgir algunas nubes. En primer lugar, las económicas. Basta con extrapolar la situación de Taiwan. Después de vivir tasas de crecimiento del PNB superiores a un 8% durante la década de los ochenta, gracias a su continuo incremento de las exportaciones, Taiwan ha visto cómo la recesión internacional, las nuevas barreras proteccionistas y la caída de sus márgenes de beneficios, por el aumento de la competencia y la subida interna de salarios, han frenado este crecimiento hasta situarlo por debajo del 6%. La respuesta del gobierno del KMT ha sido la puesta en marcha del mayor programa de infraestructuras nekeynesiano, en términos relativos, que se recuerda, para mantener el crecimiento del PNB por encima del 7%, a pesar de una inflación de cerca del 6%, en una economía acostumbrada al 2,5%. Su margen de maniobra es muy amplio gracias a sus reservas acumuladas y a una deuda externa que no llega a los 1.200 millones de dólares, aunque el programa de infraestructuras haya tenido ya que ser redimensionado a la baja. Algo muy similar ha ocurrido en Hong Kong, con los grandes proyectos de construcción del nuevo aeropuerto y las nuevas obras portuarias de la terminal de contenedores nº 9.

El factor fundamental es la creciente caída de la tasa de beneficios, tanto en Taiwan como en el caso de las industrias de China continental y Hong Kong. Una caída que ha sido superada

“Sobre este panorama de prosperidad sin precedentes, pueden surgir algunas nubes”

¿“Varias Chinas, un sólo mercado”?

La “Gran China” (las provincias litorales del continente, Hong Kong y Taiwan) ha sido en los últimos tres años la zona del mundo con mayor crecimiento económico y flujo inversor. La interrelación económica creciente entre estas tres zonas chinas se expresa en inversiones de Taiwan en el continente, en especial en la provincia de Fujien, por valor de 3.000 millones de dólares, y un flujo comercial de unos 6.000 millones, muy favorable a la isla, que hacen de ella el cuarto exportador a la República Popular. Hong Kong, como ya se ha señalado, es el primer socio inversor y comercial de Beijing, que a su vez es el principal inversor en la colonia. A todo ello hay que sumar las inversiones de los capitalistas chinos de ultramar y Singapur en las tres zonas, con un monto superior a los 25.000 millones de dólares, y que Taiwan posee las mayores reservas del mundo de divisas extranjeras, por encima de los 90.000 millones de dólares.

por la expansión en términos absolutos de los mercados, sobre todo a través de la creación de ZEEs en la República Popular. Pero después de tres años se empieza a reproducir el mismo problema en China continental, sin las posibilidades de una salida nekeynesiana, como la aplicada en Taiwan y en Hong Kong, por el creciente déficit presupuestario provincial y central y el peligro de un recalentamiento general de la economía que provoque una explosión social. Ninguno de los tres gobiernos, por las razones políticas que hemos ido exponiendo, tiene la legitimidad ni la capacidad para imponer unos programas de ajuste que frenen esta carrera inversionista -aumentando incesantemente la competencia en zonas territoriales con monopolios de facto- y permitan una reestructuración industrial que eleve la productividad a un nivel tecnológico más avanzado, ganando competitividad en unos mercados internacionales cada vez más difíciles. En este sentido, puede llegar un día en que la "Gran China" se convierta en un callejón sin salida.

Pero es probable que sean los problemas políticos los primeros en exigir una solución. Aprovechando las tensiones de la segunda Guerra Fría, la República Popular consiguió en 1972 el reconocimiento internacional, sustituyendo a la República de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como la única representante legítima de China. Con el Comunicado Conjunto sino-británico de 1984 recuperará en 1997 su soberanía sobre Hong Kong, soberanía que, por ironías de la historia, nunca perdió sobre Macao, a pesar de la administración portuguesa. La base de esta política de reunificación nacional, formulada en 1981 por el mariscal Ye Jianying con la expresión "una China, dos sistemas", ha sido la afirmación de una sola soberanía, gestionada desde Beijing por la nomenclatura del PCCh, y la concesión de una amplia autonomía interna económica para las "regiones administrativas especiales" de Hong Kong y Taiwan.

Para tener éxito, esta política exige una convergencia de intereses, por una parte, entre las diferentes fracciones de la nomenclatura del PCCh y los grandes intereses financieros e industriales de Hong Kong y Taiwan, sin olvidar la propia y poderosa burocracia del KMT, cuyo patrimonio colectivo supone casi un 15% del

PNB de la isla. La dinámica de la "Gran China" parece ayudar en este sentido, siempre y cuando el marco de autonomía de las provincias continentales y de las "regiones administrativas especiales" fuese al menos equivalente al actual statu quo, permitiendo la defensa de los propios intereses y la gestión de los complejos consensos sociales particulares. Pero la aparición de los efectos de la crisis económica, de una crisis política en cualquiera de las tres partes (en especial tras la muerte de Deng o la pérdida del poder del KMT en Taiwan) o una experiencia negativa en Hong Kong después de 1997 pueden tener rápidamente consecuencias inversas.

El problema real no es que la "política transitoria de dos Chinas" del gobierno de Taipei evolucione hacia la declaración unilateral de independencia de la "República de Taiwan", a pesar de las amenazas de una intervención armada del EPL contra la isla, sino que pueda tener efectos contagiosos en las autoridades provinciales del sur de China, si se produjera una crisis política grave de la República Popular. La generalización de las relaciones mercantiles juega también en ese sentido, y resulta difícil imaginar un Estado-nación moderno capaz de asegurar las condiciones de reproducción económica y social que escapan a la "mano invisible" en un mercado de 1.200 millones de personas, aun adoptando un federalismo muy amplio. Cabe al menos preguntarse si las mismas causas que empujaron en el siglo XVI, con el nacimiento del capitalismo en Europa, a la creación de los diversos Estados-naciones en el marco de la civilización cristiana occidental, no estarán actuando de manera parecida en la civilización china a finales del siglo XX.

Hay que constatar que esa convergencia de intereses de la que hablábamos ha sido una sorprendente realidad, como apuntaba Lee Kuan Yew, frente al ascenso del movimiento democrático, no sólo en la República Popular, con la represión de Tienanmen, sino también en Hong Kong y Taiwan. La misma ideología neautoritaria es compartida, con escasos matices, por todas las élites dominantes chinas, a pesar de su creciente incapacidad para articular los distintos intereses sociales, que se han reforzado y multiplicado con la generalización del mercado y la industrialización, en un consenso social que asegure mínimamente su

estabilidad política. Esa cuarta China, que quiere la democracia para defender sus intereses inmediatos -y que ha sido reprimida de forma muy similar en nombre de un mismo orden, cualquiera que fuese su color-, puede ver las ventajas de la integración en un sólo mercado, pero ¿qué interés puede tener en que lo regule un sólo gobierno, sobre el que seguirá sin ejercer el más mínimo control? Para poder tener éxito, la política de reunificación nacional de China debe de adquirir un carácter democrático que la hace incompatible con las burocracias del PCCh y del KMT. Unas burocracias que, por otra ironía de la historia, ocupan hoy el papel de los señores de la guerra frente a los herederos del Movimiento Cuatro de Mayo de 1919.

Notas

1. Garver (1993) hace un apasionante relato de la política del PCCh en este tema y su visión de la nueva situación internacional que emergía en 1991. El Jefe del Estado Mayor del EPL, Chi Haotian, visitó Moscú del 5 al 12 de agosto de 1991, entrevistándose antes de su partida con el Ministro de Defensa soviético y jefe golpista, Dimitri Yazov, quien, según la prensa de Hong Kong, le informó de sus planes.

2. Entre los más fieles y firmes partidarios de Deng Xiaoping desde 1980 hay que señalar al Banco Mundial, que en su última publicación sobre China resume así las conclusiones del XIV Congreso: «El nuevo paradigma es un importante avance ideológico, porque elimina la ambivalencia de la dirección sobre la dirección de las reformas y permitirá la adopción de políticas más audaces para alcanzar el objetivo declarado de establecer una economía de mercado». (Bell et al. 1993).

3. El artículo del *Financial Times* comenzaba con este párrafo: «Solamente gracias a la bancarrota política del Partido Comunista de China puede considerarse hombre del año 1992 a Deng Xiaoping». Los otros candidatos del periódico para el título, que antes habían merecido Helmut Kohl y Margaret Thatcher, eran Bill Clinton (su principal oponente), el presidente del *Bundesbank*, Helmut Schlesinger, el primer ministro de la India, P. V. Narasimha Rao, y el comisario agrícola europeo Ray MacSharry.

4. El 10 y 11 de agosto de 1992 los medios de comunicación occidentales difundieron las escenas de un motín en la ZEE de Shenzhen en la que miles de policías y cerca de un millón de ciudadanos chinos, que hacían cola, se enfrentaban en una batalla cuerpo a cuerpo que recordaba las peores escenas de Tienanmen. El motivo era la participación en una lotería, a 100 yuanes el billete y con posibilidad de adquirir hasta 10, cuyo premio sería el derecho a comprar hasta 1.000 acciones de las 14 compañías que cotizan en la bolsa local. Un premio que solo podía corresponder al 5% de los afortunados participantes. La sospecha de quienes hacían cola de que la policía y las autoridades de la ciudad estaban vendiendo participaciones a sus familiares y amigos sin respetar el turno provocó los motines al grito de «¡Abajo la corrupción!» (*The Economist*, 15 de agosto de 1992). La Bolsa de Shanghai, creada en diciembre de 1990, empezó moviendo 1.400 millones de yuanes y hoy la cifra es de 200.000 millones. Su índice pasó de 100 en diciembre de 1990 a 1.500 en enero de 1993, para caer seis meses más tarde a 700 y cerrar a finales de año con 1.000, aunque las acciones en alza han sido las llamadas B (accesibles sólo a chinos), mientras que las A (reservadas a extranjeros) cayeron en un 50% (Leser, 1993).

5. Resulta curioso que, mientras que en los debates sobre la transición del “socialismo real” al capitalismo en los países de Europa del Este y la ex-URSS ha aparecido toda una literatura que critica la “terapia de choque” a favor de un enfoque gradualista inspirado en las reformas chinas (ver, por ejemplo, *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 8 no.1 y *Pensamiento Iberoamericano* no. 22-23), entre los economistas que estudian China empezó a surgir una clara preocupación sobre el futuro de las reformas a finales de los años ochenta. En este sentido es muy interesante el número especial de *The China Quarterly* (Yeh K. C. et al., 1992), que recoge las ponencias presentadas en un seminario sobre este tema organizado por The School of Oriental and African Studies de Londres y el Lingnan College de Hong Kong en septiembre de 1991.

6. La caída de la productividad en el sector agrícola es una consecuencia lógica del agotamiento de los efectos de la desarticulación de las

comunas y la introducción de la explotación familiar. El ahorro doméstico producido en este sector no se ha invertido tanto en la mecanización de las tareas, dado el carácter intensivo en trabajo humano de la agricultura china y el aumento del crecimiento demográfico, como en hacer frente a las subidas de los precios de energía y abonos, mejorar las condiciones de vivienda y la compra de participaciones en la industria rural privada o colectiva. Junto con la continua reducción del suelo cultivable, por su uso industrial, y el abandono de la producción de cereales por otras cosechas más rentables, el aspecto más preocupante de la agricultura china a comienzos de los años noventa es la obsolescencia de toda la infraestructura colectiva hidráulica, que tendrá importantes efectos en los próximos años.

7. El uno de enero de 1994 las autoridades chinas anunciaban la unificación de las dos tasas de cambio oficial en vigor y su aproximación a la del mercado negro, lo que debe permitir en cinco años una convertibilidad completa del yuan. El paso de 5,80 yuanes a 8,70 por un dólar, supone una devaluación de un 30% que aumentará la competitividad de las exportaciones chinas, aunque refuerce las tendencias inflacionistas. También se ha anunciado un nuevo impuesto sobre el valor añadido -que ya ha provocado movimientos especulativos en los dos últimos meses en cereales, cuyos precios han subido en casi un 30% en las provincias costeras-, y aumentos fiscales sobre importación de bienes de lujo y servicios, aunque los nuevos impuestos se aplicaran a las empresas extranjeras durante un período de cinco años (*International Herald Tribune*, 4 de enero de 1994).

8. Wu Jiexiang ingresó en la Universidad de Beijing en 1977, donde inició su carrera académica en el Departamento de Economía en 1989. La publicación de Deng Xiaoping: su pensamiento y práctica le valió el reconocimiento oficial. La principal fuente de información en inglés sobre el neautoritarismo es Sautman (1992).

9. La cultura política de Taiwan está organizada alrededor del padrino clientelar del KMT, el mayor empresario de la isla, y la compra de votos en las elecciones como reafirmación de estos lazos de lealtad. En las elecciones de diciembre de 1991, el precio llegó

a alcanzar los 200 ntd (New Taiwan Dollar, unos 8 dólares EEUU). Para estar seguro de su triunfo, un candidato debe asegurarse unos 50.000 votos, con el consiguiente desembolso por parte del KMT. Ver el interesante artículo de Long (1992) y, para una exposición más general, Cheng y Haggard (1992).

Referencias bibliográficas

Bachman, D. (1992) *Fourteenth Congress of the China Communist Party*. New York: Asian Society.

Bell, M.W., Khor, H.E. y Kochhar, K. (1993) *China at the Threshold of a Market Economy*. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Cheek-Milby, K. y Mushkat, M. (1989) *Hong Kong: The Challenge of Transformation*. Hong Kong: Center for Asian Studies.

Cheng, T.-j. y Haggard, S. (1992) *Political Change in Taiwan*. Boulder: Lynne Rienner.

The Economist (1993)

"Made in Japan", 14 de agosto.

"The Real Power in Taiwan", 21 de agosto.

"China Speeds on to Market", 20 de noviembre.

"China Survey", 27 de noviembre.

"Taiwan: End of Fiction", 27 de noviembre.

"China's Diaspora Turns Homeward", 27 de noviembre.

"Taiwan: The Rout that Didn't Happen", 4 de diciembre.

"It's Already 1997 in Hong Kong", 18 de diciembre.

Dumbaugh, K. (1993) *Hong Kong: Sino-British Disputes and Implications for U.S. Interests*. Washington D.C.: CRS, The Library of Congress.

Garver, J.W. (1993) "The Chinese Communist Party and the Collapse of Soviet Communism", *The China Quarterly*, 133.

Lam, J. (1993) "Hong Kong's Divergent Tensions", *The World Today*, vol. 49, 8-9.

Long, S. (1991) *Taiwan: China's Last Frontier*. Londres: MacMillan Press.

Long, S. (1992) "Taiwan's National Assembly Elections", *The China Quarterly*, 129.

Miller, H.L. (1993) "The Fourteenth Party Congress", *Washington Journal of Modern China*, primavera.

Rocca, J.-L. (1992) "Corruption and its Shadow: An Anthropological View of Corruption in China", *The China Quarterly*, 130.

Saich, T. (1992) "The Fourteenth Party Congress: A programme for Authoritarian Rule", *The China Quarterly*, nº 132.

Sautman, B. (1992) "Sirens of the Strongman: Neo-Authoritarianism in Recent Chinese Political Theory", *The China Quarterly*, 129.

Sutter, R.G. (1992) *Taiwan's Legislative Election, 1992: Implications for Taiwan's Policies and the US Interests*. Washington D.C.: CRS, The Library of Congress.

Tien, H.-m. (1989) *The Great Transition: Political and Social Change in the Republic of China*. Stanford University Press.

Walker, T. (1993) "Lure of the Billion-Buyer Market", *Financial Times*, 14 de junio.

Wong, C. (1991) "Central-Local Relations in an era of Fiscal Decline: The Paradox of Fiscal decentralization in post-Mao China", *The China Quarterly*, 128.

World Bank (1993) *China: Budgetary policy and Intergovernmental Relations*. Report no. 11094-CHA. Washington D.C.: World Bank.

Yeh, K.C. et al.(1992) "The Chinese Economy in the 1990s", *The China Quarterly*, 131.